

INE/CG1233/2021

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; ASÍ COMO DE SU CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TZOMPANTEC, TLAXCALA, EL C. MANUEL RAMOS MONTIEL, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL CONCURRENTE 2020-2021, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/732/201/TLAX**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el escrito de queja presentado por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con sede en el municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, del Partido Revolucionario Institucional; así como de su candidato a la Presidencia Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala, el C. Manuel Ramos Montiel; denunciando la presunta omisión de reportar ingresos o gastos, sobre hechos que fueron detectados en internet y redes sociales, así como pinta de bardas, lonas, playeras, grupo musical, cierre de campaña, otros, y en consecuencia el rebase al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021. (Fojas 1-111 del expediente)

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito inicial.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

HECHOS:

1 .- El quince de octubre de dos mil veinte , fue aprobado por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones el Acuerdo ITE-CG 43/2020, por el que se aprueba el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2020 - 2021 , y en el que se determina la fecha exacta de inicio del proceso -electoral para elegir Gobernador, Diputados Locales, Integrantes de Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad, tal y como se puede consultar en el siguiente link perteneciente al referido Instituto:
<https://www.itetlax.org.mx/PDF/acuerdos-pestanas/2020/Octubre/ACUERDO%20ITE-CG32043-202032015-OCTUBRE-2020%20APROBACION%20DE320CALENDARIO320ELECTORAL%202020-2021.pdf>

2.- En Sesión Pública Ordinaria de fecha treinta de octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó el Acuerdo ITE-CG 45/2020, por el que se aprueba la convocatoria a elecciones ordinarias del año dos mil veintiuno, en el Estado de Tlaxcala, para elegir Gobernador, Diputados Locales, Integrantes de Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad, tal y como se puede consultar en el siguiente link perteneciente al referido Instituto:
<https://www.itetlax.org.mx/PDF/acuerdos-pestanas/2020/Octubre/ACUERDO%20ITE-CG32045-2020%2023-OCTUBRE-2020320CONVOCATORIA320A320ELECCIONES320PEL03202021.pdf>

4.- Con fecha quince de marzo de dos mil veintiuno el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó el Acuerdo ITE-CG 54/2021 MEDIANTE CUAL SE DETERMINAN LOS TOPES DE GASTO DE CAMPAÑA QUE PUEDEN EROGAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LAS CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA EL CARGO DE INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS Y PRESIDENTES DE COMUNIDAD, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. En el que, respecto a la elección de Ayuntamientos, se determinó como Tope de Campaña, para el municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, la cantidad de\$ 74,375.40 (Setenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos 40/100 M.N.), tal y como se puede consultar en el siguiente link perteneciente al referido Instituto:
<https://www.itetlax.org.mx/ite2020/acuerdos/2021/PDF/Marzo/ACUERDO%20ITE-CG32054-2021320ANEXO320UNO.pdf>

6. En Sesión Pública Extraordinaria de fecha nueve de mayo de dos mil veintiuno el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, dicha Autoridad Electoral Aprobó el ACUERDO ITE-CG-211/2021, POR EL QUE SE APRUEBA EL MONTO Y DISTRIBUCIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

PARA LA OBTENCIÓN DEL VOTO, PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE A CADA PARTIDO POLÍTICO Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES CORRESPONDIENTES A AYUNTAMIENTOS Y TITULARES DE PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, correspondiéndole conforme al anexo de dicho Acuerdo, al Partido Alianza Ciudadana como monto de financiamiento público para la obtención del voto en el municipio de El Carmen Tequexquitla la cantidad de \$7,019.48 (Siete mil diecinueve pesos 48/100 M.N.), tal y como se puede consultar en el siguiente link perteneciente al referido Instituto:

<https://www.itetlax.org.mx/ite2020/acuerdos/2021/PDF/Mayo/ACUER003201TE-CG3202112021320DISTRIBUCION320DE320FINANCIAMIENTO0320AYUNTAMIENTOS.pdf>

7.- El pasado seis de junio de este año, se llevó a cabo la Jornada Electoral para elegir Gobernador, Diputados Locales, Integrantes de Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad, en esta Entidad Federativa, siendo una de ellas el de Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala.

8.- Sin embargo dicho candidato incurrió en una violación grave a los principios rectores del modelo de fiscalización por no dar certeza en el ejercicio del gasto y aplicación de los recursos, incurriendo en excesos, primeramente en el de tope de campaña, ya que de acuerdo al arqueo que se acompaña al presente, la cuantificación de gasto de campaña fue de \$141,938.40 (Ciento cuarenta y un mil novecientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N.), siendo que el tope de campaña para la elección en el municipio de Tzompantepec fue por la cantidad de \$74,375.40 (Setenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos 40/100 M.N.), sin embargo, dicho candidato se excedió de dicho tope.

9.- En adición a lo anterior, el aludido candidato incurrió en el exceso de que el financiamiento privado prevaleciera sobre el público, incurriendo en una violación grave a dicha limitante establecida en nuestro máximo Código Político en su artículo 41 fracción 11, el cual dispone:

10.- Además, la mayor parte de las actividades de campaña están documentadas conforme al expediente que integra el arqueo que se acompaña al presente escrito, mismas que solicito, a través de esa vocalía, se proceda a su certificación con la Unidad Técnica de Fiscalización y se realice el procedimiento de revisión y se proceda a emitir el Dictamen Consolidado y se impongan las sanciones que en derecho corresponda.

No obstante lo anterior, dicho candidato excedió a sobremanera el financiamiento privado sobre el público, sin que transparentara la procedencia de los mismos, ya que conforme a lo expuesto en líneas anteriores su financiamiento público fue de \$7,019.48 (Siete mil diecinueve pesos 48/100 M.N.), por lo tanto su financiamiento privado no podía excederse de ese parámetro, al hacerlo en exceso lesiona los bienes jurídicos de rendición de cuentas, la transparencia de ingresos y la equidad en la contienda, lo que implica una violación sustancial, ya que omitió lo que realmente obtuvo de financiamiento privado, ocasionando con su conducta el de ocultar información y obstaculizar de manera grave la labor de esa autoridad fiscalizadora, pretendiendo confundir, de manera dolosa y mala fe, el criterio de esa autoridad administrativa electoral para no informar con veracidad los recursos empleados durante su campaña, por lo que su infracción es de naturaleza grave mayor, al presentar documentación ineficaz e irreal, con la finalidad de obtener ventaja en la campaña, ya que no puede determinarse con certeza de dónde provienen los recursos para llevar a cabo la logística de dichos eventos, cómo fueron aplicados y si tienen una fuente ilícita, quedando registrada la actividad de sus eventos en sus perfiles de Facebook

<https://www.facebook.com/Manuel-Ramos-Montiel-107417044789720/>

<https://www.facebook.com/Fundacion-Marea-Roja-AC-109044210922611>

10.- Además, la mayor parte de las actividades de campaña están documentadas conforme al expediente que integra el arqueo que se acompaña al presente escrito, mismas que solicito, a través de esa vocalía, se proceda a su certificación con la Unidad Técnica de Fiscalización y se realice el procedimiento de revisión y se proceda a emitir el Dictamen Consolidado y se impongan las sanciones que en derecho corresponda.

A efecto de acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes:

Elementos probatorios aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

- 1. Pruebas técnicas.** Consistentes en 83 fotografías y 4 enlaces de páginas electrónicas.
- 2. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.**
- 3. Instrumental de Actuaciones.**

VII. Acuerdo de admisión de queja. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y sustanciación la queja identificada con la clave alfanumérica **INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX**, notificar la admisión al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, asimismo notificar y emplazar a los sujetos incoados. (Foja 112 del expediente).

VIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.

a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio y admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 113-114 del expediente).

b) El veinte de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio y, la cédula de conocimientos respectiva. (Foja 115 del expediente).

IX. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30280/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 116 del expediente)

X. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30282/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 117 del expediente)

XI. Notificación de inicio de procedimiento de queja, emplazamiento y requerimiento de información a la Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional.

a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30496/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó¹ a la

¹ A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.

Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Tlaxcala, el inicio de procedimiento de mérito, emplazó y realizó requerimiento de información relacionado con los hechos denunciados. (Fojas 118-127 del expediente).

b) El veintitrés de junio de dos mil, mediante escrito sin número, la Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta al emplazamiento y requerimiento realizado, mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas 128-135 del expediente)

“(…)

Derivado de la lectura del apartado de hechos que alude el partido incoante resultan ser frívolos, toda vez que son expuestos de manera superficial por el actor en su escrito de queja, lo anterior en razón de que solamente presenta fotografías de bardas pertenecientes a una agrupación o asociación civil al parecer de tinte deportivo de la cual el actor presupone sin fundamento alguno que es de la autoría del otrora candidato de mi representado el Partido Revolucionario Institucional, y de igual manera es de hacerle ver al árbitro comicial que en ningún momento acredita completamente las circunstancias mínimas para la acreditación de la conducta imputada al instituto político que represento, lo anterior es así toda vez que de autos se advierte que en el pie de página de las fotografías que adjunta a su escrito de queja el denunciante inserta de manera torpe los datos referentes a la ubicación del lugar, sin embargo no hace alusión desde cuando se colgaron las fotos y videos en la red social de Facebook, circunstancias mínimas que debió haber expresado el denunciante y no solicitar que se le perfeccionen con la documental publica que ofrece, sin embargo, dadas las características del medio propagandístico, cosa contraria que alegue el actor resultaría pueril y falso a la verdad; lo anterior es sostenido por los siguientes criterios del Tribunal Federal Electoral, en las siguientes:

DESECHAMIENTO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN POR FRÍVOLO, ES NECESARIO QUE ESA FRIVOLIDAD RESULTE EVIDENTE Y NOTORIA.

(…)

Del anterior criterio se desprende que la frivolidad se debe constatar en cuanto a que las pretensiones del actor no se puedan alcanzar jurídicamente, lo cual se da en el caso que nos ocupa ya que el actor en ningún párrafo de su escueto escrito de queja hace alusión siquiera respecto de quien sea el autor

material o intelectual de las publicaciones aludidas por lo cual indebidamente se sanciona tanto al partido político que represento como al candidato a la presidencia municipal de Tzompantepec, Tlaxcala; así mismo de la simple lectura de la queja signada por el representante Acción Nacional, se desprende que los hechos son más que confuso a pesar de que esta representación ha sentado las bases de cómo es que se deben hacer las quejas y las denuncias, sin embargo a leguas se denota la falta de técnica jurídica por parte del representante del Partido Acción Nacional, es así como se cumple el criterio del máximo juzgador respecto de que los hechos denunciados al no tener un autor (del cual se tenga la plena seguridad de que los realizó) se encuentra alejados de la luz del derecho y la razón con lo que no se actualiza ninguna infracción a las leyes comiciales que rigen la contienda electoral.

Ahora bien, la autoridad fiscalizadora deberá ponderar que el calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o Distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que

imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto.

Por medio del presente escrito y con fundamento en el dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 467 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, comparezco en tiempo y forma a dar contestación ad cautelam a la demanda presentada por el Partido Acción Nacional en los siguientes términos:

A LOS HECHOS

1. Respecto de los hechos marcados con los números 1, 2, 4, 6, y 7 estos ni se afirman ni se niegan por no ser hechos propios sino de la autoridad.

2.- Por lo que hace al punto de hechos número 8, este se niega rotundamente ya que como se argumentara y demostrara de forma posterior en el desarrollo de la presente contestación ni mi representado ni su candidato entonces candidato a Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala.

3.- En cuanto al punto de hechos número 9 este también se niega rotundamente ya que se observará más adelante ni mi representado ni su candidato han incurrido en un exceso respecto del financiamiento privado y mucho menos el público.

4.- Por lo que hace al punto de hechos marcado con el número 10 ni se niega ni se afirma ya que no son hechos imputados a mi representado ni a su entonces candidato, lo anterior ya que:

Respecto de las fotografías y capturas de pantalla que se insertan en el escrito de queja es de recordar que estas no son bastantes ni suficientes y solo se consideraran como indiciarias, tal y como se indica en la jurisprudencia siguiente:

(...)

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-

Como se observa, las pruebas que sustentan la queja pertenecen al tipo de las técnicas, las cuales, por su naturaleza tienen el carácter de imperfectas por lo que se necesita adminicular con otros medios probatorios enunciados en el bagaje legal enunciada en la ley comicial para este tipo de asuntos, por lo

tanto, como se ha dicho se hace necesario que las imágenes se insertan deben ser perfeccionadas con otros medios de prueba.

Por otro lado, pero dentro del mismo tema se dice el Tribunal Electoral Federal respecto de la pruebas técnicas que "establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el Tribunal Resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar..." lo que en la especie no acontece de conformidad con los Lineamientos establecidos por el propio Tribunal Comicial, ya que se solicita al aportante que:

- 1. Señale concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares.*
- 2. Señale como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica.*
- 3. Se describirá también la conducta asumida contenida en las imágenes, con las que se pretenda acreditar la conducta denunciada por el actor.*

Lo cual en la especie no acontece ya que el actor en su escrito de denuncia solamente inserta las imágenes de bardas a nombre de lo que parece ser una organización deportiva, respecto de las cuales desconoce el origen o quienes hayan sido las personas que hayan mandado pintar esas bardas, mismas que en nada tienen que ver con el candidato de mi representado en el municipio de Tzompantepec, Tlax.

Mención especial merece la supuesta contratación del grupo musical denominado "Los Dukes", por parte del suscrito, ya que como se observara en el apartado de pruebas y derivado de la agenda reportada al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema Integral de Fiscalización, así como de la invitación realizada por los candidatos a presidentes de comunidad del municipio de Tzompantepec, y de las pólizas de dichos candidatos se desprende que el candidato a presidente municipal acudió al evento en su calidad de invitado mas no como convocante, empero, el evento fue realizado

por los candidatos a presidentes de comunidad del municipio en cita y no como se pretende hacer ver por parte del actor.

PRUEBAS

- 1. Documentales privada:** Consistente en los formatos de agendas de eventos de cada candidato, así como la contabilidad correspondiente).
- 2. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.**
- 3. Instrumental de Actuaciones.**

XII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. Manuel Ramos Montiel, candidato a la Presidencia Municipal de Tzompantepec Tlaxcala, postulada por parte del Partido Revolucionario Institucional.

a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30492/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó² al C. Manuel Ramos Montiel candidato a la Presidencia Municipal de Tzompantepec Tlaxcala, postulada por parte del Partido Revolucionario Institucional, el inicio de procedimiento de mérito emplazó y realizó requerimiento de información relacionado con los hechos denunciados. (Fojas 136-144 del expediente).

b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con respuesta a los referidos requerimientos.

XIV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32256/2021 se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificara la existencia, dimensiones y detalle las características de las bardas y lonas denunciadas por el quejoso (Fojas 175-190 del expediente).

b) El uno de julio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio número INE/DS/1810/2021, mediante el cual se informa el acuerdo de admisión del expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/379/2021, correspondiente a la

² A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.

solicitud de fe de hechos respecto de las características de las bardas y lonas denunciadas por el quejoso, asimismo, se remitió el acta circunstanciada INE/OE/JD/TLAX/01/CIRC/004/2021, mediante la cual se certificaron algunas bardas y lonas referidas. (Fojas 176-216 del expediente).

XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización.

a) El uno de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1309/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, (en adelante Dirección de Auditoría), para que informara si en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) se encontraban registrados los ingresos y gastos por concepto de bardas y lonas, así como los ingreso y gastos que derivaron del evento denunciado correspondiente al cierre de campaña, así como si contaban con visitas de verificación del evento materia del procedimiento de mérito. (Fojas 217-222 del expediente).

b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/33882/2021, la Dirección de Auditoría informó que el evento materia del presente procedimiento sí se encuentra registrado en la agenda de eventos de campaña del C. Manuel Ramos Montiel, sin embargo, precisa que no se localizaron pólizas o registro alguno de conceptos de gastos que estén vinculado directamente al evento en cuestión, toda vez que el evento fue registrado como no oneroso. (Fojas 223-228 del expediente).

c) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1376/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría, para realizar el prorrateo del evento de cierre de campaña, del día treinta de mayo de la presente anualidad entre los candidatos a Presidentes de Comunidad y el candidato a Presidente Municipal, en el municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, todos postulados por el Partido Revolucionario. (Fojas 260-263 del expediente).

d) El diez de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2500/2021, la Dirección de Auditoría remitió el prorrateo de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, correspondiente a cada uno de los candidatos que asistieron y participaron al cierre de campaña del día treinta de mayo de dos mil veintiuno. (Fojas 264-267 del expediente).

XIX. Razones y Constancias.

a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constatar la búsqueda realizada en el SIF, con el propósito de descargar las operaciones registradas en la contabilidad del C. Erick Ángel Serrano Guarneros, candidato a la comunidad de San Andrés Ahuashuastepec, perteneciente al municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, ello en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa (Fojas 145-149 del expediente).

b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constatar la búsqueda realizada en el SIF, con el propósito de descargar las operaciones registradas en la contabilidad de la C. Norma Armenta Ramos, candidata al cargo de Presidente de Comunidad de San Salvador, perteneciente al municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, ello en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa (Fojas 150-154 del expediente).

c) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constatar la búsqueda realizada en el SIF, con el propósito de descargar las operaciones registradas en la contabilidad de la C. Miriam Pérez Montiel, candidata al cargo de Presidente de Comunidad de San Juan Quetzalcoapan, perteneciente al municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, ello en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa (Fojas 155-159 del expediente).

d) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constatar la búsqueda realizada en el SIF, con el propósito de descargar las operaciones registradas en la contabilidad de la C. Elizabeth Domínguez Ramírez, candidata al cargo de Presidente de Comunidad de Xaltianquisco perteneciente al municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, ello en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa (Fojas 160-164 del expediente).

e) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constatar la búsqueda realizada en el SIF, con el propósito de descargar las operaciones registradas en la contabilidad del C. Ángel de Jesús Rodríguez Aguirre, otrora candidato al cargo de Presidente de Comunidad de San Mateo Inohpilello, perteneciente al municipio de

Tzompantepec, Tlaxcala, en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa (Fojas 165-170 del expediente).

f) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constatar la búsqueda realizada en el SIF, con el propósito de descargar las operaciones registradas en la contabilidad del C. Manuel Ramos Montiel, candidato al cargo de Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 de la citada entidad federativa (Fojas 171-174 del expediente).

XX. Alegatos.

a) El dos de julio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó abrir la etapa de alegatos en el presente procedimiento de queja y notificar a las partes, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Foja 229 del expediente)

b) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/33064/2021, se notificó al C. Manuel Ramos Montiel, candidato a la Presidencia Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala, postulado por el Partido Revolucionario Institucional el acuerdo de alegatos respectivo (Fojas 230-236 del expediente).

c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta a la etapa de alegatos.

d) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/33065/2021, se notificó a la Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, el acuerdo de alegatos respectivos. (Fojas 237-243 del expediente).

e) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, la Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, formuló sus alegatos con relación al expediente de mérito. (Fojas 244-248 del expediente).

f) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/33066/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional en el estado de Tlaxcala, el acuerdo de alegatos respectivo (Fojas 249-255 del expediente).

g) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta a la etapa de alegatos.

XXI. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Electoral y Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, numeral 1, inciso g de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues de ser así deberá decretarse el desechamiento o el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Visto lo anterior es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con relación al 32 numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dichos preceptos disponen lo siguiente:

**Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización**

“(…)

Artículo 30.
Improcedencia

1. El procedimiento será improcedente cuando:

(…)

II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos, en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.

(…)

(…)

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“(…)

Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

(…)

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose como por tales:

I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio o evidente que no se encuentran al amparo del derecho;

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;

III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y

IV. Aquellas que únicamente se funden en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.

(…)”

**Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización**

*“Artículo 32.
Sobreseimiento*

1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:

(…)

II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia.

(...)"

De lo anterior, se desprende que la frivolidad de los hechos denunciados constituye una causal de improcedencia del procedimiento sancionador en materia de fiscalización. En tal sentido, resulta de capital relevancia el análisis de dicha causal, misma que fuera invocada por el Partido Revolucionario Institucional en su escrito de respuesta al emplazamiento y alegatos que le fueron notificado por esta autoridad.

En este orden de ideas y a efecto de ilustrar de manera clara la actualización o no de las hipótesis normativas antes citadas, es necesario precisar que el concepto de denuncia referido en el escrito de queja que nos ocupa es el siguiente:

- La presunta omisión de reportar ingresos o gastos, sobre hechos que fueron detectados en internet y redes sociales, así como pinta de bardas, lonas, playeras, grupo musical, cierre de campaña, otros, y en consecuencia el rebase al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021

En el escrito de queja, el sujeto denunciante solicitó que se indagaran los presuntos hechos antes señalados; para ello, aportaron como pruebas los medios de convicción referidos en los Antecedentes de la presente Resolución, con los cuales, a dicho del quejoso, se acreditarían conductas infractoras a la normatividad electoral en materia de fiscalización.

En esa tesitura, es menester contrastar las características de las pruebas presentadas por los quejosos con aquellas señaladas en la causal de improcedencia en comento; con la finalidad de verificar si la misma se actualiza en el caso que nos ocupa, lo que se expone a continuación:

- a) Por cuanto hace al requisito señalado en la fracción I del inciso e), numeral 1, del artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es preciso señalar que la misma no se actualiza, en atención a que los hechos denunciados tienen por finalidad el ejercicio de las atribuciones conferidas por la normatividad a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mismas que se encuentran contenidas en los artículos 192, numerales 1 y 2; 196, numeral 1 y 199, numeral 1 incisos a) y c) de la ley antes señalada; por versar los mismos sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.

b) Respecto al requisito señalado en la fracción II, es importante destacar que el denunciante ofreció pruebas para tratar de acreditar su dicho, mismas que fueron relacionados con las diversas diligencias realizadas por la autoridad fiscalizadora, motivos por los cuales se considera que no se actualiza el requisito referido con anterioridad.

c) Respecto al requisito contenido en la fracción III del artículo en comento, y como ya se expuso en el inciso a) del presente considerando, los hechos denunciados por los quejosos en su escrito de mérito se relacionan con el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tlaxcala, motivo por el cual los mismos pueden constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. En tal sentido, no se actualiza la hipótesis referida.

d) Por lo que hace al requisito indicado en la fracción IV del artículo en comento, se considera que el mismo no se cumple, toda vez que los medios de prueba aportados por los quejosos, no constituyen generalizaciones respecto de los hechos denunciados.

En virtud de lo anterior, resulta claro que no se cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a efecto de tener por cierto que los hechos denunciados deban ser considerados como frívolos y que, por tanto, se actualice la causal de improcedencia establecida en el diverso artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Consecuentemente, y toda vez que no se actualiza la causal de improcedencia esgrimida por el Partido Revolucionario Institucional, ni se advierte la actualización de ninguna diversa, lo conducente es la continuación del análisis de los hechos denunciados y la valoración de los medios de convicción obtenidos por virtud de la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve

3. Estudio de Fondo. Una vez agotadas las cuestiones de previo y especial pronunciamiento y establecida la competencia, resulta procedente fijar el fondo, materia del presente procedimiento.

De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el **fondo del presente asunto** consiste en

determinar si el Partido Revolucionario Institucional, así como su candidato a la Presidencia Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala, el C. Manuel Ramos Montiel omitieron reportar ingresos o gastos, sobre hechos que fueron detectados en internet y redes sociales, así como pinta de bardas, lonas, playeras, grupo musical, cierre de campaña y otros, en consecuencia el rebase al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021, en el estado de Tlaxcala.

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I, 83, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 29, 31, 32, 96, numeral 1, 127 y 218, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña;

“Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargo de elección popular a la presente Ley:

(...)

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y

(...)”

Ley General de Partidos Políticos

“(...)”

Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

b) Informes de Campaña:

1. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato haya realizado en el ámbito territorial correspondiente;

Artículo 83.

2. En los casos en los que se promoció a dos o más candidatos a cargos de elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma:

a) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Senador, se distribuirá el gasto en un cuarenta por ciento para Presidente de la República y un sesenta por ciento al candidato a Senador;

b) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Diputado Federal, se distribuirá en un sesenta por ciento al candidato a Presidente de la República, y un cuarenta por ciento al candidato a Diputado Federal;

c) En el caso de los candidatos a Presidente de la República, Senador y Diputado Federal, se distribuirá el gasto en un veinte por ciento al Presidente de la República, cincuenta al candidato a Senador, y en un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal;

d) En caso de que los gastos de campaña estén integrados para los candidatos a Presidente de la República, Senador, Diputado Federal y una campaña local, el gasto será distribuido en un quince por ciento al candidato a Presidente de la República; un treinta y cinco por ciento al candidato a Senador; en un veinticinco por ciento al Diputado Federal y un veinticinco por ciento a la campaña local respectiva;

e) En los casos en los que intervenga el candidato a Presidente de la República y una campaña local, se distribuirán en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente de la República y en un sesenta por ciento a la campaña local;

f) En los casos en que estén integrados por los candidatos a Presidente de la República, Senador y una campaña local; se distribuirá en un veinte por ciento al candidato a Presidente de la República; sesenta por ciento al candidato a Senador y un veinte por ciento al candidato de la elección local respectivo;

g) En el caso en el cual intervengan los candidatos a Presidente de la República, Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente, en un treinta y cinco al candidato a Diputado Federal y en un veinticinco al candidato de la elección local;

h) En el caso donde participe un candidato a Senador y un candidato a Diputado Federal, se distribuirá el gasto en un setenta por ciento al candidato a Senador y un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal;

i) En el supuesto en el que participe un candidato a Senador, un candidato a Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cincuenta por ciento al candidato a Senador, un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal y un veinte por ciento al candidato a la campaña local;

j) En el caso en que participen un candidato a Senador, y un candidato de índole local; se distribuirá, en un setenta y cinco por ciento al candidato a Senador y un veinticinco al candidato de la elección local respectiva;

k) En el caso en el que participe un candidato a Diputado Federal y un candidato relacionado con una campaña local; se distribuirá en un cincuenta por ciento, respectivamente, y

l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a Senadores o Diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas locales.

Reglamento de Fiscalización

Artículo 29.

Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en procesos electorales

1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes: I. Los gastos genéricos de campaña, mismos que se pueden identificar como:

a) Los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el partido o la coalición promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña.

b) En los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición. c) En los casos en los que se publique, difunda o mencione el emblema, lema con los que se identifique al partido, coalición o sus candidatos en conjunto o los contenidos de sus plataformas electorales, sin que se identifique algún candidato en particular.

II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de elección popular, mismos que se pueden identificar como:

a) Conjunto: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar al voto, especificando ámbitos de elección y tipos de campaña, sin mencionar específicamente a uno o más candidatos. b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso, sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el artículo 83 de la Ley de Partidos. 2. El procedimiento para prorratear el gasto identificado en el numeral 1 anterior, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del presente Reglamento.

(...)

Artículo 31. Prorrateo por ámbito y tipo de campaña

1. El prorrateo en cada ámbito y tipo de campaña se sujetará a lo siguiente: a) Campañas a senadores. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se distribuirá entre los candidatos a senadores beneficiados en proporción a su límite de gastos de campaña que corresponda según la entidad federativa de que se trate.

b) Campañas a diputados federales. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se distribuirá entre los candidatos a diputados federales beneficiados de manera igualitaria. c) Campañas locales. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se distribuirá entre los tipos de campaña y los candidatos beneficiados en los términos que establezca el artículo 218 del Reglamento

.

Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio

1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:

a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos.

b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado.

c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, Distrito electoral federal, Distrito electoral local o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal.

d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los servicios contratados o aportados para ese acto.

2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios siguientes:

a) Tratándose de la propaganda utilitaria, en razón de su distribución según lo señale el correspondiente Kardex, notas de entrada y salida de almacén y cualquier otra evidencia documental que le genere convicción a la autoridad del beneficio.

b) En el caso de la propaganda en anuncios espectaculares, en función del ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios conforme a lo dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo. c) En el caso de la propaganda exhibida en salas de cine, de acuerdo al ámbito geográfico donde se ubiquen conforme a lo dispuesto en el numeral 1, inciso

c), del presente artículo.

d) Respecto a la propaganda difundida en internet se considerarán la totalidad de las candidaturas a nivel nacional del partido o coalición, siempre y cuando no se advierta la referencia a uno o varios candidatos. e) Por lo que se refiere a los gastos de producción de radio y televisión, se considerarán las precampañas, campañas, precandidatos y candidatos en función al contenido del mensaje y al ámbito geográfico en el que se difunda, de acuerdo con el catálogo de cobertura que apruebe el Comité de Radio y Televisión vigente.

f) Tratándose de gastos en diarios, revistas y medios impresos será en función de la cobertura geográfica de cada publicación.

g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos.

h) Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas de campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas para las que el personal integrante de la estructura de que se trate, haya realizado sus actividades. En el caso de no contar con la identificación de las campañas para las que prestaron sus servicios, se ubicará conforme al municipio o delegación, Distrito federal o local, según sea el caso, que corresponda al domicilio de cada persona integrante de la estructura.

i) En el caso de que se localicen gastos personalizados que contravengan lo dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización, deberá reconocerse el beneficio a las campañas de los candidatos identificados con los gastos de que se trate, independientemente de quién haya contratado el bien o servicio. Por campaña beneficiada se entenderá aquélla que se vea favorecida por la erogación de gastos, donaciones o aportaciones, y que tenga como finalidad difundir o promocionar alguno de los siguientes elementos: al candidato, a la coalición que lo postula, al cargo de elección por el que se contiene, o al partido político.

Artículo 96

Control de los ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

(...)

Artículo 127.

Documentación de los egresos

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.

Artículo 218. Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico

2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, sin incluir otro tipo de gastos. a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y conforme a la tabla de distribución siguiente: (...)

b) Para campañas locales: Tratándose de los casos, en los que se promoció a dos o más candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local, para la distribución de los gastos de campaña se estará a lo siguiente: (...)"

(...)"

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, es decir, precampaña, campaña u ordinario, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación correspondiente a la erogación de un gasto o la percepción de un ingreso, con la finalidad de que el mismo se encuentre debidamente reportado.

En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus ingresos y egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.

Por las razones expuestas, los sujetos obligados tienen la obligación de reportar ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en sus informes del ejercicio de que se trate, en el caso que nos ocupa la obligación de haber registrado el evento presuntamente llevado a cabo el día treinta de mayo de la presente anualidad, con motivo del cierre de campaña, la totalidad de los ingresos y gastos percibidos y erogados para su realización, así como los ingresos o gastos por conceptos de lonas, bardas y camisas.

Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados, de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.

Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

Debido a lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente la totalidad de los ingresos y egresos que realicen pues ello permite al órgano

fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.

Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

En este sentido los artículos antes transcritos, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar veraz y contablemente la totalidad de los ingresos y egresos realizados, soportarlos documentalmente y que su realización se apegue a los límites y cauces normativos, lo que permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.

Adicional a lo anterior es importante precisar que los partidos políticos tienen la obligación de realizar el prorrateo de los gastos, entre las candidaturas que sean favorecidas, es decir se debe determinar el porcentaje del beneficio económico entre las y los candidatos correspondientes.

En caso de que se vulneren las disposiciones normativas relacionadas con el prorrateo vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

Previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como **INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX**, es importante señalar que el catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del estado de Tlaxcala el escrito de queja presentado por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones con sede en el municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, por el cual hace del conocimiento hechos presumiblemente violatorios a la normatividad electoral en materia de fiscalización, atribuibles a los sujetos incoados.

Debido a lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al contenido del escrito de queja, respecto de la totalidad de los conceptos denunciados, que a dicho del quejoso constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, para lo cual aportó diversos medios de prueba a efecto de acreditar sus pretensiones, desprendiéndose lo siguiente:

1. Se denuncia la realización de un evento que se llevó a cabo el treinta de mayo de dos mil veintiuno, en el cual participó el C. Manuel Ramos Montiel, candidato a la Presidencia Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala por Partido Revolucionario Institucional, así como los gastos derivados del mismo, tales como la contratación de un grupo musical, templete y equipo de sonido.
2. Asimismo, denuncia diversos ingresos y/o gastos tales como: pinta de bardas, lonas y camisas; y, consecuentemente, solicitan la suma de estos conceptos al tope de gastos de campaña.

Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que las pretensiones del quejoso, a su dicho, violatorias de la normatividad electoral en materia de fiscalización, durante el periodo de campaña presuntamente cometidas por Partido Revolucionario Institucional, y el C. Manuel Ramos Montiel, en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021, en el estado de Tlaxcala, se sustentan en imágenes fotografía; medios de convicción que por su naturaleza constituyen pruebas técnicas en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Debido a lo anterior, es necesario señalar que, a las pruebas técnicas, se le otorga un valor indiciario, de acuerdo con lo establecido por el artículo 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Así, el quejoso documenta su pretensión con las pruebas técnicas consistentes en imágenes y link de páginas de internet, medios de prueba que se encuentran incluidos en el escrito de queja, y que presuntamente evidencian el desarrollo del evento denunciado.

Resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión formulada. Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”**, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de estas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.³

Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente.

³ En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”**, señala que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.

Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al pretender tener por acreditados los hechos materia de denuncia únicamente merced a fotografías y páginas de internet, toda vez que, como ya se dijo, las mismas constituyen únicamente indicios.

De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, en todo caso, de los ingresos y/o gastos realizados, mismos que debieron ser registrados en los respectivos informes. Así las cosas, no obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el valor probatorio que representan, y en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian.

No obstante, lo anterior, en virtud de la observancia del **principio de exhaustividad y certeza** que deben regir las resoluciones de esta autoridad electoral administrativa, todas las pruebas presentadas se tomarán en cuenta y se agregarán a la valoración respectiva con el fin de contar con la mayor cantidad de elementos que pudieran esclarecer los hechos motivo de la queja que ahora se resuelve.

Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso es acreditar los posibles ingresos y/o gastos no reportados, derivados de la presunta realización de un evento que se llevó a cabo el treinta de mayo de dos mil veintiuno, en el cual participó el C. Manuel Ramos Montiel, candidato a la Presidencia Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala por el Partido Revolucionario Institucional, solicita sumar las erogaciones que derivan del evento denunciado, así como los ingresos y gastos por concepto de pinta de bardas, lonas y camisas al tope de gastos de campaña de la misma.

Ahora bien, a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los apartados siguientes:

Apartado A. Evento reportado en la Agenda de Eventos del Sistema Integral de Fiscalización.

Apartado B. Concepto de gastos denunciados registrados en el Sistema Integral de Fiscalización

Apartado C. Conceptos denunciados de los cuales no se acreditó su existencia y no guardan relación con el sujeto incoado.

Apartado D. Indebido prorrateo del gasto.

- **Gastos susceptibles de prorrateo**

Apartado E. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.

4. Individualización de la sanción

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados correspondientes.

Apartado A. Evento reportado en la Agenda de Eventos del Sistema Integral de Fiscalización.

En este apartado, en un primer momento abordaremos si se tiene reportado en la agenda de eventos del Sistema Integral de Fiscalización perteneciente al C. Manuel Ramos Montiel, candidato a la Presidencia Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala la realización del evento denunciado, para que en caso de que sea así esta autoridad se pronuncie respecto de los ingresos y gastos que presuntamente derivaron del mismo.

Mediante acuerdo del día diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y sustanciación la queja identificada con la clave alfanumérica **INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX**, asimismo ordena notificar y emplazar a los sujetos incoados.

Así, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30496/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, el inicio de procedimiento de mérito, emplazó y realizó requerimiento de información relacionado con los hechos denunciados.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

Por tal motivo el veintitrés de junio de dos mil, mediante escrito sin número, la Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta al emplazamiento y requerimiento realizado, manifestando lo siguiente:

Se anexa al presente ocurno la agenda de eventos del candidato, así como la agenda de eventos de los candidatos a presidencias de comunidad y respectiva invitación realizada por los antes mencionados, donde se demuestra que el evento de cierre de campaña es de los candidatos a presidentes de comunidad y en su momento asistió el candidato a municipal, pero en calidad de invitado.

Al realizar el análisis al anexo correspondiente a la agenda de eventos del C. Manuel Ramos Montiel, exhibido por la Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, se desprende que dicho evento fue reportado con la descripción: *asistencia como invitado a cierre de campaña de las comunidades de Tzompantepec*, así mismo se visualiza que el evento se reportó como *no oneroso*.

Además de lo anterior mediante oficio INE/UTF/DRN/1309/2021 de fecha uno de junio de la presente anualidad, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informará si en la agenda de eventos del C. Manuel Ramos Montiel, se encontraba registrado el evento materia del procedimiento de mérito, en atención a lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DA/33883/2021, la citada Dirección informó, entre cosas, lo siguiente:

En ese sentido, respecto al punto número 1, del inciso A), si fue reportado en la agenda de eventos del candidato a la Presidencia Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala, el C. Manuel Ramos Montiel, por el Partido Revolucionario Institucional el evento señalado como cierre de campaña.

Por lo que, de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, a las que debe sujetarse esta autoridad electoral para valorar las pruebas que obran en el expediente, y atento a lo que dispone el artículo 17, en relación con el artículo 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se debe de considerar que, concatenado con lo expresado por los sujetos incoados y por lo informado por la Dirección de Auditoría, se tiene la certeza del **reporte del evento en la agenda de eventos del C. Manuel Ramos Montiel en el Sistema Integral de Fiscalización** materia del procedimiento de mérito.

Apartado B. Concepto de gastos denunciados registrados en el Sistema Integral de Fiscalización

El presente apartado se encuentra integrado por todos aquellos conceptos de gasto denunciados por el quejoso, y que al realizar el cruce correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en la contabilidad número 96526, correspondiente al C. Manuel Ramos Montiel, candidato a la Presidencia Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala, se encuentran reportados.

En ese sentido, el quejoso denuncia que el sujeto incoado incurrió en la omisión de reportar ingresos y gastos consistentes en pinta de bardas, lonas, playeras, grupo musical, cierre de campaña y otros, del candidato incoado, adjuntando a su escrito de queja imágenes y ligas electrónicas con las que pretenden acreditar su dicho.

Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links de Facebook de los cuales se desprenden videos ofrecidos por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de administrarse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía información precisa de los conceptos referidos, ni tampoco elementos temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, tampoco era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no se advertía información mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba la propaganda.

En ese contexto, del análisis realizado a los elementos probatorios de carácter técnico presentados por el quejoso, así como del contenido de la razón y constancia, **fue posible conocer de manera genérica diversos conceptos denunciados.**

Lo anterior es así toda vez que, si bien el quejoso remitió direcciones electrónicas de publicaciones realizadas en la red social Facebook, así como imágenes, lo cierto es que **cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza (prueba**

técnica), el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares, las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, lo cual no acontece en el presente caso, ya que el quejoso no relaciona cada elemento probatorio con los conceptos de gasto que refiere, ni mucho menos aporta mayores elementos de convicción tendentes a acreditar el número de unidades referidas por el quejoso por cada concepto denunciado. Asimismo, tampoco refiere mayores características del contenido de la propaganda denunciada, si la misma contiene alguna imagen, signo, emblema o expresión que haga alusión a los sujetos incoados y sea motivo de reporte ante esta autoridad, toda vez que sólo se limita a enunciar dichos conceptos de gasto.

Es importante para esta autoridad detenernos en el concepto de pinta de bardas ya que esta autoridad como primera diligencia y con el objeto de verificar la existencia de estas, solicitó a la Dirección del Secretariado de este Instituto que certificara las bardas denunciadas por el quejoso, en atención a lo anterior mediante acta circunstanciada INE/OE/JD/TLAX/01/CIRC/004/2021, se informó que no se encontró la propaganda denunciada.

No obstante, lo anterior, como respuesta al emplazamiento el Partido Revolucionario Institucional, presentó respuesta en la cual refirió las pólizas en las cuales realizó el registro de las mismas.

En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos del instituto político, así como del candidato incoado, se realizó razón y constancia de los registros contables del C. Manuel Ramos Montiel, donde se advierte el registro en el SIF de los conceptos siguientes:

ID	Concepto	Reportada	Contabilidad	Póliza	Periodo	Tipo de póliza	Documentación Soporte
1	Pinta de bardas	Sí	96526	1	1	Corrección	Factura XML
2	Lonas	Sí	96526	1	1	Corrección	Factura XML
3	Camisas	Sí	96526	1	1	Corrección	Factura XML

La razón y constancia de la contabilidad de los sujetos incoados, constituye una documental pública, en términos del artículo 16 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, es decir que la misma hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie del reporte de los gastos denunciados, enlistados en el cuadro previo.

Ahora bien, no obstante, lo expuesto, de actualizarse alguna infracción en materia de fiscalización relacionado con el registro y reporte de los conceptos de gasto expuestos en el cuadro anterior (tal como el de registro de operaciones en tiempo real o cualquier otra que se encuentre prevista en la ley electoral en materia de fiscalización), se determinará lo que en derecho corresponda en el Dictamen Consolidado de la revisión de Informes de Campaña que en su momento se emita.

Lo anterior, tomando en consideración que el procedimiento de revisión de Informes de Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia autoridad fiscalizadora.

La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar el Dictamen Consolidado atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los gastos erogados y beneficios generados durante la campaña electoral, aunado al hecho de que como se ha sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación⁴ **los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización son complementarios al procedimiento administrativo de revisión de informes.**


Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir que por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, el Partido Revolucionario Institucional, así como su candidato al cargo de Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala, el C. Manuel Ramos Montiel no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos; en relación con los artículos 96, numeral 1, 127, motivo por el cual el presente apartado debe de declararse como **infundado**.

Apartado C. Conceptos denunciados de los cuales no se acreditó su existencia y no guardan relación con el sujeto incoado.

El presente apartado está integrado por aquellos conceptos que el quejoso menciona en su escrito de queja y que, a su dicho, implicaron la omisión del reporte de gastos por parte del sujeto incoado; sin embargo, derivado de los elementos probatorios aportados en el escrito de queja, así como de las diligencias llevadas a cabo por esta autoridad, no se acreditó la existencia de los gastos denunciados.

Del análisis al escrito presentado se advierte que hace referencia que en la red Social del candidato incoado y de la Fundación Marea Roja se pueden acreditar los conceptos de gasto denunciados, adicionalmente presente dentro de los elementos probatorios imágenes de bardas con la leyenda Marea Roja. El caso en comento se cita a continuación:

⁴ Así lo sostuvo al resolver el SUP-RAP-24/2018.

Concepto	Elemento Probatorio Aportado (ejemplo)	Observaciones
60 bardas con la leyenda "Marea Roja"		No se observan el nombre del candidato ni del partido incoado.

Como se muestra en el cuadro precedente, se denuncian gastos por concepto de **pinta de bardas cuyo contenido refiere Marea Roja.**

En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las bardas pintadas con leyenda "Marea Roja", argumentado que de ellas se advierte un beneficio para el candidato incoado, sin embargo, en las fotografías únicamente describe lo que contiene la pinta de las bardas, siendo lo siguiente: *"Barda, ubicada en el Municipio de Tzompantepec, se observa la frase "Vamos por un progreso Marea Roja" así como la imagen de un caballo y una pelota de béisbol".*

Aunado a lo anterior, esta autoridad realizó una búsqueda en la página de Facebook denominada Marea Roja de la cual se desprende que corresponde a una organización deportiva de beisbol sin que se tenga una sola imagen que refiera un vínculo con el partido o candidato denunciado.

Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una pesquisa generalizada de la autoridad electoral.

Al respecto, y por cuanto hace los medios de prueba existentes en los enlaces de las publicaciones de la red social Facebook, la naturaleza de los medios de comunicación denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores⁵ relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:

- Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.
- Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
- Que las redes sociales (como Facebook) constituyen un espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
- Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de su creación y, en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.

En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el

⁵ De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.

acceso a la información por parte de la ciudadanía⁶. Así pues, mientras que algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.

Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido⁷ que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración entre personas.

Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.

En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.

Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales es insuficiente por sí sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en

6 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutela del ejercicio de la libertad de expresión.

7 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.

consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:

- Tiempo, fechas en que subió la imagen.
- Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
- Lugar, los referidos en la red social.

Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.

Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:

- Día, hora y ubicación de la realización del acto.
- Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la que se realiza la publicación.
- Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la publicación primigenia.
- Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro usuario desde la publicación original.

De lo anterior, se desprende que la temporalidad y ubicación de un acto no necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.

Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.

Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las

percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la identidad.

Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva de manifestar ideas escritas o transmitir imágenes por dicho medio con la finalidad de obtener reacciones en general.

Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica⁸, toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son insuficientes por sí solas para acreditar la existencia de los hechos que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales

Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la

⁸ De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

*conurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
(...)*

Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse con los elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos descritos.

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.

En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,⁹ entre ellos:

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos siguientes:

(...)

III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia;

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;

V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.

⁹ El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo General el 16 de diciembre de 2015.

(...).”

[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que el quejoso se encontraba sujeto a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno de los conceptos denunciados) y a enlazarlas entre sí, de tal manera que resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada.

En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte de las denunciantes, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra fotografía, y la mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el candidato incoado.

De igual forma, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia en el expediente SUP-RAP-184/2017, estableció que se efectúa una debida valoración de las pruebas aportadas con el escrito de queja, cuando no se cuenta con algún respaldo fáctico o jurídico adicional, por lo que el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías que integran el acervo probatorio de referencia (como en el presente caso).

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del material probatorio.

En consecuencia y toda vez que el quejoso en ningún momento acreditó una relación, aunque sea de carácter indiciaria entre la Fundación Marea Roja y los sujetos incoados aunado a que los elementos aportados constituyen pruebas técnicas y de las constancias que obran en el procedimiento de mérito no es

posible advertir que los conceptos denunciados constituyen beneficio a favor de los sujetos incoados, es por ello que con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir que esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el Partido Revolucionario Institucional, así como el candidato a Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala, el C. Manuel Ramos Montiel, vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos; en relación con los artículos 96, numeral 1, 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse **infundado**, respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa.

Apartado D. Indebido prorratio.

El quejoso señaló, en su escrito de queja mediante un enlace de la red social Facebook, que el otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala por el Partido Revolucionario Institucional, omitió reportar los ingresos o gastos por concepto de la realización de un evento el día treinta de mayo de dos mil veintiuno con motivo de su cierre de campaña.

Visto lo anterior, tomando en consideración que los hechos denunciados en el presente apartado, se sustentan en medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de los mismos en cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una pesquisa generalizada de la autoridad electoral.

Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica¹⁰, toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales.

¹⁰ De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

Sirve para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido en la Jurisprudencia 4/2014 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-

Por consiguiente, bajo el principio de exhaustividad se procedió a realizar diversas diligencias con el fin de otorgar certeza procesal; siendo así que mediante oficio INE/UTF/DRN/30496/2021, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, correspondiente al emplazamiento a los sujetos incoados, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional información sobre el reporte de los ingresos y gastos correspondientes a la realización del evento de fecha treinta de mayo de dos mil veintiuno, solicitando la siguiente información y obtenido las respuestas siguientes:

1. *"Remita la documentación soporte que acredite el registro en el Sistema Integral de Fiscalización de los eventos a que hace referencia el escrito de queja, en la agenda de eventos de su candidatura denunciada. "*

Respuesta. *Se anexa al presente recurso la agenda de eventos del candidato, así como la agenda de eventos de los candidatos a presidencias de comunidad y respectiva invitación realizada por los antes mencionados, donde se demuestra que el evento de cierre de campaña es de los candidatos a presidentes de comunidad y en su momento asistió el candidato a municipal, pero en calidad de invitado.*

2. *"Informe la contabilidad y pólizas contables en las cuales fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, los gastos, aportaciones y/o donaciones realizadas con motivo de los conceptos de gastos señalados en el escrito de queja.*

3. **Respuesta.** *Se anexa al presente recurso las pólizas donde contiene el reporte de los gastos realizados de las siguientes contabilidades:*

ID DE CONTABILIDAD
96526
104240

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

ID DE CONTABILIDAD
104234
104235
104170
103650

4. *"Informe si con motivo de la realización de cierre de campaña del C. Manuel Rojas Montiel, contrató los servicios del grupo musical denominado "los dukes". De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, informe la contabilidad y pólizas contables en las cuales fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, los gastos, aportaciones y/o donaciones por la prestación de los servicios del grupo musical denominado."*

Respuesta. Se informa que el grupo musical denominado "los dukes" fue una aportación realizada para el evento de cierre de campaña de los candidatos a presidentes de comunidad como se demuestra con las agendas de eventos y las pólizas donde se registro el gasto.

Derivado de la respuesta de la Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, se realizó una búsqueda en las contabilidades correspondientes a los candidatos a Presidencias de Comunidad por el Partido Revolucionario Institucional, aportadas en el escrito de respuesta al emplazamiento, de la cual se levantó razón y constancia¹¹, como resultado de dicha búsqueda se constató que el evento fue registrado en dichas contabilidades, tal y como se describe a continuación.

Candidato	Contabilidad	Poliza	Descripción de la póliza	Cantidad
Erick Ángel Serrano Guarneros	103650	1	Aportación de sonido y templete	\$3,300.00
Norma Armenta Ramos	104235	2	Aportación de sonido y templete	\$2,000.00
Miriam Pérez Montiel	104234	2	Aportación de sonido y templete	\$1,500.00
Elizabeth Domínguez	104170	3	Aportación de sonido y templete	\$600.00

¹¹ La razón y Constancia, en términos de los artículos 16 numeral 1 y 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

Candidato	Contabilidad	Poliza	Descripción de la póliza	Cantidad
Ramírez				
Ángel de Jesús Rodríguez Aguirre	104240	1	Aportación de sonido y templete	\$600.00
Total				\$8,000.00

Candidato	Contabilidad	Poliza	Descripción de la póliza	Cantidad
Norma Armenta Ramos	104235	1	Aportación de grupo musical	\$2,500.00
Miriam Pérez Montiel	104234	1	Aportación de grupo musical	\$2,500.00
Elizabeth Domínguez Ramírez	104170	1	Aportación de grupo musical	\$1,500.00
Ángel de Jesús Rodríguez Aguirre	104240	4	Aportación de grupo musical	\$1,500.00
Total				\$8,000.00

Continuando con la línea de investigación lo anterior mediante oficio INE/UTF/DRN/1309/2021 de fecha uno de junio de la presente anualidad, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informará si en los registros de contabilidad del C. Manuel Ramos Montiel, se encontraba registrado el evento materia del procedimiento de mérito, en atención a lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DA/33883/2021, la citada Dirección informó, entre cosas, lo siguiente:

Respecto al punto 1, del inciso B), se informa que no se encuentran registrados gastos o ingresos, relativos a la propaganda referida, dentro de la contabilidad registrada en el SIF correspondiente al C. Manuel Ramos Montiel, candidato a la Presidencia Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala por el Partido Revolucionario Institucional.

Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en

ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

Adicionalmente a lo anterior es importante señalar que los presidentes de comunidad que registraron el gasto corresponden al Municipio de Tzompantepec, asimismo todos fueron postulados por el Partido Revolucionario Institucional y en el evento de mérito es de apreciarse que se hace un llamado al voto al Partido Revolucionario Institucional y en consecuencia a los candidatos que encuentran en el mismo.

En ese sentido y al hacer una valoración completa a las constancias que integran el expediente es posible advertir que el sujeto obligado acepta la participación y asistencia en el evento de mérito; sin embargo, no reconoce que debió haber realizado el registro del ingreso por concepto del evento denominado cierre de campaña, ya que a su juicio no le generó un beneficio.

Al respecto, es importante destacar que, de los elementos probatorios aportados, se pudo observar que el candidato incoado reportó en su agenda de eventos con motivo de participación en el referido evento, que tuvo intervención en el mismo y no solo como invitado, ya que el mismo fue presentado con el carácter del puesto por el que se postuló, subió al templete y realizó el uso de la voz, refiriendo que ese evento correspondía al cierre de campaña de todos los candidatos que se encontraban en el mismo y pidió el apoyo de las personas para que los apoyasen en la Jornada Electoral.

Ahora bien, es importante señalar que como previamente quedo acreditado las otrora candidaturas a presidencias de comunidad, llevaron a cabo el reporte de los gastos con motivo del evento, lo cual conlleva a esta autoridad a determinar que no existió una omisión de su parte de reportar un ingreso o egreso; no obstante, si se acredita la omisión de no realizar el reporte de los ingresos o gastos con motivo del evento de cierre de campaña, por parte del candidato C. Manuel Ramos Montiel, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que se considera **fundado** el presente apartado.

En tal razón, se advierte que se debe realizar el prorrateo entre la totalidad de los candidatos por concepto de sonido, templete y grupo de musical para la realización del evento de treinta de mayo con motivo de su cierre de campaña.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

- Gastos susceptibles de prorrateo**

Es importante destacar que de las constancias que integra el expediente y toda vez que se trata de un evento que debió ser prorrateado entre la totalidad de los candidatos beneficiados, de conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.

Es por ello que mediante oficio INE/UTF/DRN/1376/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría a efecto de que realizará el prorrateo del evento de cierre de campaña, del día treinta de mayo de la presente anualidad entre los candidatos a Presidentes de Comunidad y el candidato a Presidente Municipal, en el municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, todos postulados por el Partido Revolucionario

El diez de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2500/2021, la Dirección de Auditoría remitió el prorrateo de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, correspondiente a cada uno de los candidatos que asistieron y participaron al cierre de campaña del día treinta de mayo de dos mil veintiuno, obteniendo los resultados siguientes:

		UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN										
		DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS										
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL										
		ESTADO DE TLAXCALA										
		PRORRATEO DE GASTOS										
		ANEXO 1										
ID Contabilidad	Sujeto Obligado	Ámbito	Tipo de Candidatura	Entidad / Circunscripción	Municipio / Delegación	Nombre(S)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tope de Campaña	Porcentaje de participación	Monto reportado	Monto prorrateado de acuerdo al RF
104234	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	LOCAL	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD MR	TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	MIRIAM	PEREZ	MONTIEL	\$7,975.78	0.073924629	\$2,500.00 \$1,500.00	\$1,182.79
104240	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	LOCAL	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD MR	TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	ANGEL DE JESUS	RODRIGUEZ	AGUIRRE	\$4,968.00	0.046046601	\$1,500.00 \$600.00	\$736.75
103650	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	LOCAL	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD MR	TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	ERIK ANGEL	SERRANO	GUARNEROS	\$5,958.10	0.055223481	\$3,300.00	\$883.58
104170	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	LOCAL	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD MR	TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	ELIZABETH	DOMIGUEZ	RAMIREZ	\$4,968.00	0.046046601	\$1,500.00 \$600.00	\$736.75
104235	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	LOCAL	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD MR	TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	NORMA	ARMENTA	RAMOS	\$9,645.42	0.08939992	\$2,500.00 \$2,000.00	\$1,430.40
96526	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	LOCAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	MANUEL	RAMOS	MONTIEL	\$74,375.40	0.689358768	\$0.00	\$11,029.74
Total									\$107,890.70		\$16,000.00	\$16,000.00

En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los hechos que se investigan, se colige que el partido incoado, omitió realizar el registro adecuado del prorrateo por concepto de sonido, templete y grupo musical, por un importe determinado de **\$16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.)**, y es así, que esta autoridad concluye que resulta razonable y objetivo considerar

dicho monto como el involucrado para la determinación de la sanción que corresponde.

Por otra parte, toda vez que los registros realizados por las candidaturas a presidencias de comunidad se han modificado en virtud del prorrateo previamente realizado y se ha cuantificado a la contabilidad del C. Manuel Ramos Montiel, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Tzompantepec , Tlaxcala, se ordena el seguimiento en el Informe de Campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Tlaxcala, a efecto de que se vean impactadas las modificaciones en su contabilidad.

APARTADO E. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.

Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos incoados** en la consecución de las conductas materia de análisis.

De conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.*

El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales

- b) Informe anual
- c) Informes mensuales
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano
 - c) Informes de campaña**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero
 - c) Informe de Situación Presupuestal

En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.

Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos políticos establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este respecto de la conductas imputables al candidato.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que *los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la Jurisprudencia 17/2010 **RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.**¹²

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de

¹² Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

4. Individualización de la sanción

Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 83, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, así como 29, 31, 32 y 218, numeral 2 del del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta determinando lo siguiente:

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a la irregularidad identificada, se concluye la omisión de realizar el prorrateo correspondiente respecto un evento realizado el treinta de mayo de dos mil veintiuno con motivo del cierre de campaña, entre la totalidad de las candidaturas favorecidas, atentando a lo dispuesto en los artículos 83, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 29, 31, 32 y 218, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El Partido Revolucionario Institucional, omitió realizar el prorrateo correspondiente entre la totalidad de las candidaturas favorecidas, derivado del evento realizado el treinta de mayo de dos mil veintiuno con motivo del cierre de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 202-2021 en el estado de Tlaxcala, por un monto de **\$16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.)**

Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió en el marco de la revisión de los Informes de Campaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Tlaxcala.

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Tlaxcala.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir realizar el prorrateo correspondiente entre la totalidad de las candidaturas favorecidas, se vulneran la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 83, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos¹³; 29, 31, 32 y 218, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización¹⁴.

¹³ «**Artículo 83.** (...) **2.** En los casos en los que se promoció a dos o más candidatos a cargos de elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma: (...) **I)** En los casos de campaña federal, si se suman más de dos

candidatos a Senadores o Diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas locales."

¹⁴ **Artículo 29. Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en procesos electorales 1.**

Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes: **I.** Los gastos genéricos de campaña, mismos que se pueden identificar como: **a)** Los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el partido o la coalición promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña. **b)** En los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición. **c)** En los casos en los que se publique, difunda o mencione el emblema, lema con los que se identifique al partido, coalición o sus candidatos en conjunto o los contenidos de sus plataformas electorales, sin que se identifique algún candidato en particular. **II.** Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de elección popular, mismos que se pueden identificar como: **a)** Conjunto: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar al voto, especificando ámbitos de elección y tipos de campaña, sin mencionar específicamente a uno o más candidatos. **b)** Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso, sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el artículo 83 de la Ley de Partidos. **2.** El procedimiento para prorratear el gasto identificado en el numeral 1 anterior, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del presente Reglamento. (...) **Artículo 31.**

Prorrateo por ámbito y tipo de campaña 1. El prorrateo en cada ámbito y tipo de campaña se sujetará a lo siguiente: **a)** Campañas a senadores. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se distribuirá entre los candidatos a senadores beneficiados en proporción a su límite de gastos de campaña que corresponda según la entidad federativa de que se trate. **b)** Campañas a diputados federales. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se distribuirá entre los candidatos a diputados federales beneficiados de manera igualitaria. **c)** Campañas locales. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se distribuirá entre los tipos de campaña y los candidatos beneficiados en los términos que establezca el artículo 218 del Reglamento. **Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio 1.** Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: **a)** El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos. **b)** En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. **c)** Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, distrito electoral federal, distrito electoral local o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. **d)** En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los servicios contratados o aportados para ese acto. **2.** Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios siguientes: **a)** Tratándose de la propaganda utilitaria, en razón de su distribución según lo señale el correspondiente kardex, notas de entrada y salida de almacén y cualquier otra evidencia documental que le genere convicción a la autoridad del beneficio. **b)** En el caso de la propaganda en anuncios espectaculares, en función del ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios conforme a lo dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo. **c)** En el caso de la propaganda exhibida en salas de cine, de acuerdo al ámbito geográfico donde se ubiquen conforme a lo dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo. **d)** Respecto a la propaganda difundida en internet se considerarán la totalidad de las candidaturas a nivel nacional del partido o coalición, siempre y cuando no se advierta la referencia a uno o varios candidatos. **e)** Por lo que se refiere a los gastos de producción de radio y televisión, se considerarán las precampañas, campañas, precandidatos y candidatos en función al contenido del mensaje y al ámbito geográfico en el que se difunda, de acuerdo con el catálogo de cobertura que apruebe el Comité de Radio y Televisión vigente. **f)** Tratándose de gastos en diarios, revistas y medios impresos será en función de la cobertura geográfica de cada publicación. **g)** Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. **h)** Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas de campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas para las que el personal integrante de la estructura de que se trate, haya realizado sus actividades. En el caso de no contar con la identificación de las campañas para las que prestaron sus servicios, se ubicará conforme al municipio o delegación, distrito federal o local, según sea el caso, que corresponda al domicilio de cada persona integrante de la estructura. **i)** En el caso de que se localicen gastos personalizados que contravengan lo dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización, deberá reconocerse el beneficio a las campañas de los candidatos identificados con los gastos de que se trate, independientemente de quién haya contratado el bien o servicio. Por campaña beneficiada se entenderá aquella que se vea favorecida por la erogación de gastos, donaciones o aportaciones, y que tenga como finalidad difundir o promocionar alguno

De los artículos señalados se desprende que, los partidos políticos tienen la obligación de realizar el prorrateo de los gastos, entre las candidaturas que sean favorecidas, es decir se debe determinar el porcentaje del beneficio económico entre las y los candidatos correspondientes.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 83 numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 29, 31, 32 y 218, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización,

*de los siguientes elementos: al candidato, a la coalición que lo postula, al cargo de elección por el que se contiene, o al partido político. (...) **Artículo 218. Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico** (...) **2.** Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, sin incluir otro tipo de gastos. **a)** Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y conforme a la tabla de distribución siguiente: (...) **b)** Para campañas locales: Tratándose de los casos, en los que se promoció a dos o más candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local, para la distribución de los gastos de campaña se estará a lo siguiente: (...)”*

normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

El Partido Revolucionario Institucional cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibió financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo establecido en el Acuerdo ITE-CG 08/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en fecha quince de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se determinaron los montos totales de financiamiento ordinario, y para actividades específicas de los partidos políticos en el estado de Tlaxcala para el ejercicio 2021, asignándole el siguiente monto:

Partido Político	Monto Asignado
Partido Revolucionario Institucional	\$3,164,215.59

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En razón de lo anterior, es necesario señalar que el Partido Revolucionario Institucional cuenta con las siguientes sanciones pendientes de saldar:

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de junio de 2021	Montos por saldar	Total
1	Partido Revolucionario Institucional	INE/CG355/2018	\$310.32	\$310.32	\$0.00	\$7,316,368.63
		INE/CG1158/2018	\$136,999.90	\$65,610.84	\$71,389.06	
		INE/CG55/2019	\$3,107,586.28	\$0.00	\$3,107,586.28	
		INE/CG464/2019	\$2,033,954.46	\$0.00	\$2,033,954.46	
		INE/CG645/2020	\$2,103,438.83	\$0.00	\$2,103,438.83	

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político cuenta con financiamiento local y tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudiera imponérsele en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) *CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.)**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.¹⁵

¹⁵ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **30% (treinta por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.)**, lo que da como resultado total la cantidad de **\$4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Revolucionario Institucional**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña.

Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos

materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.

Tal y como quedó acreditado en la presente Resolución, el Partido Revolucionario Institucional realizó un indebido prorratio entre la totalidad de los candidatos que participaron en el evento de cierre de campaña.

A continuación, se presentan las cifras correctas del prorratio que se debió de haber realizado y en consecuencia la cuantificación final a los sujetos obligados.

Candidato	Cargo	Postulado por	Monto no reportado
C. Manuel Ramos Montiel	Presidencia Municipal de Tzompantepec, Tlaxcala,	Partido Revolucionario Institucional	\$11,029.74
C. Miriam Pérez Montiel	Presidencia de Comunidad del municipio de Tzompantepec, Tlaxcala,	Partido Revolucionario Institucional	\$1,182.79
C. Ángel de Jesús Rodríguez Aguirre	Presidencia de Comunidad del municipio de Tzompantepec, Tlaxcala	Partido Revolucionario Institucional	\$736.75
C. Erik Ángel Serrano Guarneros	Presidencia de Comunidad del municipio de Tzompantepec, Tlaxcala	Partido Revolucionario Institucional	\$883.58
C. Elizabeth Domínguez Ramírez	Presidencia de Comunidad del municipio de Tzompantepec, Tlaxcala	Partido Revolucionario Institucional	\$736.75
C. Norma Armenta Ramos	Presidencia de Comunidad del municipio de Tzompantepec, Tlaxcala	Partido Revolucionario Institucional	\$1,430.40

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización **cuantificará** la cantidad referida en el cuadro inmediato anterior, entre la totalidad de los sujetos obligados involucrados, en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña respectivo, para efecto que dichos gastos sean considerados en los toques de gastos de campaña respectivo, en términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción VII del Reglamento de Fiscalización¹⁶.

Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.

6. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que

¹⁶ **Artículo 192. Conceptos integrantes de los toques** 1. Para efectos del tope de gastos de obtención del apoyo ciudadano, precampaña y campaña, serán considerados los conceptos siguientes: (...) b) Los gastos determinados por autoridad, tales como: (...) vii. Los gastos por cuantificar, ordenados por Resoluciones del Consejo General.

determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su instituto político.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, así como su candidato a Presidente Municipal, el C. Manuel Ramos Montiel, en los términos del **Considerando 3, Apartado A, B y C** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral de queja en materia de fiscalización en contra del Partido Revolucionario Institucional, en los términos del **Considerando 3, Apartado D** de la presente Resolución.

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4 en relación al **Considerando 3 Apartado D** se impone al **Partido Revolucionario Institucional** una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)**.

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión a los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos incoados, correspondientes al Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en el estado de Tlaxcala, del Partido Revolucionario Institucional, se considere el monto detallado en el **Considerando 5** de la presente Resolución para efectos del tope de gastos de campaña; así como el seguimiento a los gastos registrados en el informe de campaña.

QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización dé seguimiento durante el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2019, a efecto de realizar el prorrateo entre los candidatos incoados en los términos señalados en el **Considerando 3, Apartado D** de la presente Resolución.

SEXTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido Acción Nacional, así como al Partido Revolucionario Institucional, a través del Sistema Integral de Fiscalización

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

SÉPTIMO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a Manuel Ramos Montiel a través del Sistema Integral de Fiscalización

OCTAVO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para los efectos siguientes:

a) Proceda al cobro de la sanción impuesta al Partido Revolucionario Institucional, la cual se hará efectiva a partir de que cause estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción económica sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

b) Informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución.

NOVENO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento del Tribunal Electoral de Tlaxcala y a la Sala correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

DÉCIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/732/2021/TLAX

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**